

- **Expediente N.º: EXP202306324**

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE APERCIBIMIENTO

Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: **A.A.A.** (en adelante, la parte reclamante) con fecha 30 de abril de 2023 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra **B.B.B.** con NIF *****NIF.1** (en adelante, la parte reclamada). Los motivos en que basa la reclamación son los siguientes:

La parte reclamante manifiesta que es vecina de la parte reclamada y que éste ha instalado una cámara de videovigilancia que, por su ubicación y orientación, es susceptible de captar imágenes de su vivienda.

Junto a la notificación se aportan imágenes de ubicación del sistema de videovigilancia de la parte reclamada.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

La actuación de traslado y solicitud de información se notificó a la parte reclamada en fecha 30 de mayo de 2023, vía postal, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según prueba de entrega que consta en el expediente. La parte reclamada contesta el 10/06/23, manifestando que las cámaras se han puesto por seguridad, ya que han envenenado a uno de sus gatos y cree probable que haya sido una vecina y teme por la seguridad de sus hijos menores.

El sistema se compone de 4 cámaras, indica que no captan imágenes de propiedades vecinas, sino a lo lejos. Las cámaras sólo graban cuando se activan porque ocurre algo y según señala no almacena imágenes pues cuando le avisa la aplicación visualiza la imagen y si no ocurre nada, la borra.

Las imágenes sólo se visualizan en el móvil de la parte reclamada a través de una aplicación de la marca de los dispositivos.

Aporta imágenes de las cuatro cámaras y todas, menos una, captan un espacio que se encuentra fuera de la propiedad de la parte reclamada. La más problemática es la del cenador, ya que capta la terraza de la vecina que, aunque tiene una valla, no es opaca.

TERCERO: Con fecha 30 de julio de 2023, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

CUARTO: Con fecha 8 de febrero de 2024, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento de apercibimiento a la parte reclamada, por la presunta infracción del Artículo 5.1.c) y del artículo 13 del RGPD, tipificadas en el Artículo 83.5 del RGPD.

QUINTO: La notificación del citado acuerdo de iniciación, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), fue recogida en fecha 09/02/2024 como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente.

SEXTO: En fecha 12 de febrero de 2024 se recibe escrito de alegaciones de la parte reclamada en el que, en síntesis, se explican las medidas adoptadas recogiendo las siguientes consideraciones:

“Exposición de medidas adoptadas:

*-Reorientación de la cámara anteriormente denominada “CENADOR” en la actualidad denominada “PISCINA”. Dicha reubicación se efectuó en el mes de septiembre de 2023, al vender la casa (...), al considerar que ya no existe riesgo de que se arroje algo desde el ***DIRECCIÓN.1, incluido matarratas. Se redirige la cámara hacia la puerta de acceso a mi vivienda desde la piscina.*

-Reorientación de la cámara denominada con anterioridad “ENTRADA”, ahora “ENTRADA PEATONAL” más hacia la puerta principal de la vivienda. Se introduce máscara de privacidad para dejar fuera del campo de visión cualquier zona exterior a la propiedad.

-Reorientación de la cámara denominada con anterioridad “MURO”, ahora “ENTRADA COCHES” más hacia abajo, ya que, como ocurre con la primera cámara, al ser el muro colindante con (...) y haber vendido la casa, no existe riesgo de que se vuelven a arrojar objetos desde la casa de la parte reclamante. Se introduce máscara de privacidad para dejar fuera del campo de visión cualquier zona exterior a la propiedad. La cámara denominada “GARAJE” tan sólo cambia de denominación a “COCINA”

*Las cuatro cámaras pretenden vigilar y disuadir a ladrones y okupas, lamentablemente cada vez más frecuentes en la zona. NO enfocan ni graban zonas comunes, otras propiedades ni la vía pública. Como ya hice constar en mis aclaraciones aportadas con anterioridad, la instalación de las cámaras se hizo a raíz de la muerte de uno de mis gatos por envenenamiento. La parte reclamante no sólo me denunció a la AEPD, sino que lo hizo ante la Policía Local de ***LOCALIDAD.1, por la colocación de una cámara entre otras acusaciones que se han demostrado falsas y de las que he sido absuelto en sentencia firme por el Juzgado Mixto número X ***LOCALIDAD.2. Lo que no hacía constar (...) es que la zona que entraba en el campo de visión de mi cámara es una construcción ilegal que atenta contra la intimidad de varios vecinos. Se aporta*

su propia fotografía presentada como prueba contra mí en el juicio, donde se demuestra que la privacidad asaltada es la de mi vivienda..."

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El día 30/04/2023 la parte reclamada tenía instalado un sistema de videovigilancia compuesto de 4 cámaras, de las cuales todas, menos una, captaban un espacio que se encontraba fuera de la propiedad de la parte reclamada. En concreto la instalada en el cenador capta la terraza de la parte reclamante que, aunque tiene una valla, no es opaca, según consta en su escrito de respuesta al traslado de la reclamación.

SEGUNDO: El día 12/02/2024 se han reorientado las cámaras y se han introducido máscaras de privacidad, según queda acreditado en las alegaciones.

La citada cámara en el hecho anterior, anteriormente denominada "CENADOR" en la actualidad denominada "PISCINA" se reubicó en el mes de septiembre de 2023, se redirigió la cámara hacia la puerta de acceso a la vivienda desde la piscina, según describe la parte reclamada en sus alegaciones, aportando la foto que lo acredita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia

De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1 y 64.3 de la LOPDGDD, es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: *"Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."*

II

Alegaciones aducidas

En relación con las alegaciones aducidas al acuerdo de inicio del presente procedimiento de apercibimiento, descritas en el antecedente de hecho SEXTO, esta Agencia no tiene nada que objetar, habida cuenta de que la parte reclamada ha adoptado las medidas adecuadas en las cámaras ubicadas en su propiedad para evitar captar imágenes de la vía pública o propiedades colindantes, si bien es cierto

que en la fecha de la reclamación las cámaras estaban captando imágenes fuera de su propiedad de forma indebida y no contaba con el obligado cartel informativo.

III

La imagen es un dato personal

La imagen física de una persona, a tenor del artículo 4.1 del RGPD, es un dato personal y su protección, por tanto, es objeto de dicho Reglamento.

En el artículo 4.2 del RGPD se define el concepto de “*tratamiento*” de datos personales. Las imágenes generadas por un sistema de cámaras o videocámaras son datos de carácter personal, por lo que su tratamiento está sujeto a la normativa de protección de datos.

Es, por tanto, pertinente analizar si el tratamiento de datos personales (imagen de las personas físicas) llevado a cabo a través del sistema de videovigilancia denunciado es acorde con lo establecido en el RGPD.

IV

Principios relativos al tratamiento

La letra c) del artículo 5.1 del RGPD propugna:

“1. Los datos personales serán:

(...)

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);”

Esto significa que en un tratamiento concreto sólo pueden tratarse los datos personales oportunos, que vengan al caso y que sean los estrictamente necesarios para cumplir la finalidad para la que son tratados.

El tratamiento debe ser ajustado y proporcional a la finalidad a la que se dirige. La pertinencia en el tratamiento de los datos debe producirse tanto en el momento de la recogida de los datos como en el posterior tratamiento que se realice de los mismos. Conforme a lo antedicho, debe restringirse el tratamiento de los datos excesivos o bien procederse a la supresión de los mismos.

La aplicación del principio de minimización de datos en materia de videovigilancia comporta que no puedan captarse imágenes de la vía pública, puesto que el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad previa autorización gubernativa.

En algunas ocasiones, para la protección de espacios privados, donde se hayan instalado cámaras en fachadas o en el interior, puede ser necesario para garantizar la finalidad de seguridad la grabación de una porción de la vía pública.

Es decir, las cámaras y videocámaras instaladas con fines de seguridad no podrán obtener imágenes de la vía pública salvo que resulte imprescindible para dicho fin, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas.

Y, en tal caso extraordinario, las cámaras sólo podrán captar la porción mínima necesaria para preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación y, en particular, no pudiendo afectar a los espacios públicos circundantes, edificios contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado. Las cámaras instaladas no pueden obtener imágenes de espacio privativo de tercero y/o espacio público sin causa justificada debidamente acreditada, ni pueden afectar a la intimidad de transeúntes que transiten libremente por la zona.

No está permitida, por tanto, la colocación de cámaras hacia la propiedad privada de vecinos con la finalidad de intimidarlos o afectar a su ámbito privado sin causa justificada.

Tampoco pueden captarse ni grabarse imágenes en espacios propiedad de terceros sin el consentimiento de sus titulares, o, en su caso, de las personas que en ellos se encuentren. Asimismo, resulta desproporcionado captar imágenes en espacios privados, tales como vestuarios, taquillas o zonas de descanso de trabajadores.

Por otra parte, el artículo 13 del RGPD establece la información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado, en virtud del cual:

"1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*
- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*
- c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;*
- d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;*
- e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;*
- f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición.*

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

- a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
- b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
- c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;
- d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
- e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos;
- f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.

Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información."

V

Normativa protección de datos

El artículo 6.1 del RGPD respecto de la licitud del tratamiento propugna:

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
- b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
- c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
- d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
- e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
- f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del

interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

En cuanto al tratamiento con fines de videovigilancia, el artículo 22 de la LOPDGDD establece que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

El artículo 12.1 del RGPD indica que quien lleve a cabo un tratamiento de datos personales, como es la captación de imágenes mediante un sistema de videovigilancia, deberá suministrar a los interesados la información indicada en los artículos 13 y 14 del RGPD.

Con la finalidad de que el deber de información previsto en el artículo 12 del RGPD se cumpla de manera concisa y comprensible para el afectado, el citado artículo 22 de la LOPDGDD prevé en relación con la videovigilancia un sistema de “*información por capas*”.

En este sentido, la primera capa ha de referirse, al menos, a la existencia del tratamiento (videovigilancia), la identidad del responsable, la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD y dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. La información de la segunda capa debe estar disponible en un lugar fácilmente accesible al afectado, ya sea una hoja informativa en una recepción, cajero, etc., colocada en un espacio público visible o en una dirección web, y ha de referirse al resto de elementos del artículo 13 del RGPD.

No es necesario especificar la ubicación precisa del equipo de videovigilancia. Este deber de información se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible, y como mínimo, en los accesos a las zonas vigiladas ya sean interiores o exteriores.

En caso de que el espacio videovigilado disponga de varios accesos deberá disponerse de dicho distintivo de zona videovigilada en cada uno de ellos. Esta información debe suministrarse por adelantado (considerando 39 del RGPD). El objetivo es que quede claro el contexto de la vigilancia.

VI

Tipificación y calificación de las infracciones

De conformidad con las evidencias de las que se dispone en el presente momento de resolución del procedimiento de apercibimiento, se considera que la parte reclamada ha cometido una infracción del principio de minimización de datos del artículo 5.1.c del RGPD, ya que aporta imágenes de las cuatro cámaras que tiene instaladas y todas menos una, captaban un espacio que se encontraba fuera de la propiedad de la parte reclamada. La más problemática era la del cenador, ya que captaba la terraza de la vecina que, aunque tenía una valla, no era opaca.

Así mismo, se considera que la parte reclamada ha cometido una infracción de los deberes de información de los datos previstos en el artículo 13 del RGPD, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de LOPDGD ya que en el campo de visión de dos de las cámaras instaladas se apreciaba que capta parte de la vía pública, por lo que se tenía que cumplir con la obligación de información a través de la exposición de carteles informativos ya que el tratamiento de las imágenes dejaría de considerarse doméstico al captar más allá de la propiedad de la parte reclamada.

Los hechos conocidos son constitutivos de dos infracciones, imputables a la parte reclamada, según lo dispuesto en el artículo 5.1.c) del RGPD, que dispone que los datos personales serán “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados” y en el artículo 13 del RGPD que propugna la obligación de información al afectado del tratamiento de sus datos personales.

A efectos del plazo de prescripción de las infracciones, la infracción imputada del artículo 5.1.c) prescribe a los tres años, conforme al artículo 72.a) de la LOPDGD, que califica de muy grave la siguiente conducta:

“a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679”.

En cuanto a la infracción imputada del artículo 13 del RGPD también prescribe a los tres años, conforme al artículo 72.1.h de la LOPDGD, que califica de muy grave la siguiente conducta:

“h) La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 de esta ley orgánica”.

VII

Apercibimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado artículo 83 del RGPD, el citado Reglamento dispone en el apartado 2.b) del artículo 58 “Poderes” lo siguiente:

“Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación:

(...)

b) dirigir a todo responsable o encargado del tratamiento un apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento; (...)”

Asimismo, el artículo 64 de la LOPDGD que regula la “Forma de iniciación del procedimiento y duración”, en su apartado tercero dispone que:

“3. Cuando así proceda en atención a la naturaleza de los hechos y teniendo debidamente en cuenta los criterios establecidos en el artículo 83.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la

Agencia Española de Protección de Datos, previa audiencia al responsable o encargado del tratamiento, podrá dirigir un apercibimiento, así como ordenar al responsable o encargado del tratamiento que adopten las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos de una determinada manera y dentro del plazo especificado.

El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones.

Será de aplicación en este caso lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 de este artículo.”

En el presente caso, una vez analizada toda la documentación que obra en el expediente, se considera conforme a derecho dirigir un apercibimiento a la parte reclamada por la infracción de los artículos 5.1.c y 13 del RGPD, si bien es cierto que la situación se habría solventado como consta en las alegaciones; en la actualidad, el sistema de videovigilancia no estaría captando espacio fuera de la propiedad de la parte reclamada, como sí ocurría con anterioridad al acuerdo de inicio.

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE**:

PRIMERO: DIRIGIR UN APERCIBIMIENTO a **B.B.B.**, con NIF *****NIF.1**, por las infracciones de los artículos 5.1.c) y 13 del RGPD, tipificadas en el artículo 83.5 del RGPD.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a **B.B.B.**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica->

web/], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

1403-16012024

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos